

El Consenso de Washington versus el de Beijing: ¿cuál es el camino para África?

SANUSI LAMIDO SANUSI, gobernador del Banco Central de Nigeria

EL REPLANTEARSE la estrategia de desarrollo que necesita África para tener un papel importante dentro de la economía global es una necesidad imperiosa y más si se tiene en cuenta la extrema pobreza que existe en el continente. Con los años, la participación de África en el mercado global ha sido insignificante a pesar de la implementación de las políticas recomendadas por las instituciones internacionales de financiación y de desarrollo. Los pésimos resultados de la economía africana ponen en tela de juicio la efectividad de las ideologías económicas prescritas por estas instituciones internacionales y evidencian la necesidad de cambiar de modelo para conseguir un desarrollo sostenible.

En el último cuarto de siglo, África ha sido víctima de la ortodoxia liberal de estas instituciones, las cuales defienden de forma persistente la privatización de las empresas estatales, el libre comercio, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la desregularización de la inversión extranjera directa (IED), entre otras medidas, como requisitos para que los países en vías de desarrollo crezcan y se desarrollen. Esta prescripción política es la que John Williamson acuñó como el Consenso de Washington y cuya ideología neoliberal se refleja en las políticas de las instituciones Bretton Woods: el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Concretamente, el FMI y el Banco Mundial ofrecen su ayuda a los países en vías de desarrollo siempre y cuando estos se adhieran estrictamente a las políticas del Consenso de Washington. Este consenso ha sido duramente criticado debido a los resultados que ha tenido en aquellos países que han adoptado sus doctrinas (especialmente en África subsahariana, en Latinoamérica y en los países que componían la antigua Unión Soviética), ya que no ha conseguido el prometido crecimiento sostenible.

El notable crecimiento económico de China durante los últimos 30 años, país que ha rehusado adoptar el marco original y ampliado del Consenso de Washington, arroja dudas sobre su potencial irrefutable. El importante milagro económico de China, el cual ha sido descrito por Joshua Cooper Ramo como el Consenso de Beijing, representa un símbolo del éxito chino y un desafío al poder normativo del Consenso de Washington.

El Consenso de Beijing se engloba bajo tres máximas: innovación, fomento del control del caos y teoría de la autodeterminación; estos principios están arraigados en las políticas de China y los resultados son mejoras paulatinas, innovación y experimentación, crecimiento basado en la exportación. A pesar del éxito notable del Consenso de Beijing, se ha argumentado que es poco probable que sea sostenible a largo plazo, que va en contra de las aspiraciones de las personas tal y como demuestra una serie de revoluciones en los países del norte de África (Williamson, 2012). Es más, si se hiciera una revisión histórica de cómo progresaron los países desarrollados se vería que no se adoptaron las políticas que se recomiendan para los países en vías de desarrollo. Tal y como señaló Ha-Joon Chang (2003), algunas de las políticas contra las que las instituciones Breton Wood se han rebelado son precisamente aquellas que se adoptaron durante las fases de desarrollo de otros países. Por ejemplo, hoy día la Organización Mundial del Comercio se opone al uso de las subvenciones a la exportación y a la protección de la industria naciente, no obstante, el Reino Unido y Estados Unidos sí fueron partidarios de estas políticas cuando empezaron a desarrollarse.

Por tanto, para lograr un crecimiento sostenible y rápido son necesarias tanto una política pragmática como instituciones que se adapten mejor a las etapas del desarrollo y a las realidades de los países en vías de desarrollo; y lo que es más, los países desarrollados se beneficiarán a largo plazo (Ha-Joon, 2003).

El aparente fracaso del Consenso de Washington cuando se ha utilizado en los países en vías de desarrollo y la posible insostenibilidad del Consenso de Beijing a largo plazo hacen indispensable un cambio de modelo en la estrategia de un desarrollo económico sostenible en África; este nuevo enfoque debería identificar los caminos de desarrollo que se comprometen con un cambio progresivo y esta podría ser una posible alternativa a la actual estrategia de desarrollo.

La pregunta es si África puede aprovechar el potencial de sus enormes recursos naturales, la envergadura del mercado regional y los recursos humanos de que dispone para encontrar una estrategia totalmente diferente para su desarrollo y que encaje con las realidades y las culturas del país sin tener que adoptar las máximas del Consenso de Washington y del de Beijing.

Cuando los banqueros son “banksters”

JULIO GODOY

PARÍS.—Medios de comunicación, dirigentes políticos y ciudadanos europeos arremeten contra los banqueros, acusándolos, en el mejor de los casos, de ser cómplices de innumerables operaciones ilegales y, en el peor, de ser directamente delincuentes.

El mejor ejemplo de esta ola de indignación es el uso de la palabra “bankster”, combinación de “banker” (banquero, en inglés) y gánster, incluso utilizada por los medios de países no anglosajones.

El término, acuñado durante la crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión de los años 20 y 30, resurgió en los medios británicos en el 2009, y apareció ahora en la primera plana del periódico francés Libération.

En un breve documento sobre política bancaria divulgado el 21 de este mes, el presidente del opositor Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania, Sigmar Gabriel, acusó a los banqueros de “chantajear a gobiernos y estados con la amenaza de una bancarrota con efecto dominó”, de “complicidad con actividades delictivas”, como la evasión impositiva y el lavado de dinero, y de “perjudicar a sus propios clientes”.

La lista de quejas es larga. En Estados Unidos se acusa al banco HSBC de lavar dinero de narcotraficantes latinoamericanos y de organizaciones islámicas presuntamente involucradas en actividades terroristas.

En un comunicado del 17 de este mes, el HSBC asume su responsabilidad: “Hubo ocasiones en que el banco no pudo cumplir con los estándares que esperan los reguladores y los clientes. Reconocemos estos errores, respondemos por nuestras acciones y nos comprometemos a solucionar lo que no funcionó bien”.

El llamado escándalo LIBOR (acrónimo en inglés de tasa interbancaria ofrecida de Londres), puso al descubierto la connivencia de numerosas instituciones internacionales, entre las que están Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, UBS, el Deutsche Bank y, otra vez, el HSBC, para falsificar información sobre las tasas de interés interbancarias con el fin de que los bancos centrales hicieran lo propio con las suyas.

La tasa LIBOR es una referencia para el mercado monetario, fijada por la Asociación de Banqueros Británicos.

Además, las instituciones financieras se vieron envueltas en una gran confabulación de evasión fiscal.

La independiente Red de Justicia Fiscal, que investiga la evasión impositiva internacional y el papel de los bancos en los paraísos fiscales, estima que unos 11,5 billones de dólares de activos están guardados en bóvedas de seguridad, lo que hace que los estados se pierdan de recaudar unos 250 mil millones de dólares al año.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya: “la evasión y el fraude fiscal ponen en riesgo los ingresos de los estados”, y recuerda que el Senado de Estados Unidos estima que se pierden 100 mil millones de dólares al año por la evasión fiscal cometida por personas y empresas en ese país.

“En muchas naciones, los montos ascienden a miles de millones de euros”, remarca la OCDE. “Eso significa menos recursos para infraestructura y servicios, como educación y salud, y perjudica los estándares de vida en economías desarrolladas y en desarrollo”, añade.

Los activos se encuentran en paraísos fiscales, como los territorios británicos de Isla de Man, Guernsey y Gibraltar, y en las Islas Caimán y similares, aunque también en instituciones financieras que operan en ciudades como Londres y Nueva York, y en países como Suiza, Singapur y Mónaco.

Los delitos financieros ocurren cuando los países del Norte industrializado atraviesan una grave crisis de deuda soberana que ha dejado a muchos de ellos en bancarrota.

El problema se originó, o por lo menos se agravó, con la crisis financiera que se gestó en el 2007, precisamente porque los bancos quedaron al borde de la



quiebra y debieron ser rescatados por los estados para evitar la caída del sistema financiero.

Pero la ayuda no hizo más que echar a andar una crisis financiera cíclica, y ahora bancos españoles, griegos y chipriotas reclaman asistencia de los gobiernos nacionales que sacrifican a sus ciudadanos recordando el gasto en servicios públicos básicos como educación, salud e infraestructura.

Todo esto se hace para que los mercados financieros internacionales sigan operando casi sin regulación, mientras los “banksters” se asignan salarios principescos y bonos cuantiosos.

El 18 de este mes, Libération reveló que, en el 2011, solo cuatro grandes bancos franceses pagaron a sus directivos 1 100 millones de euros (más de 1 300 millones de dólares) en bonos.

La situación hizo que algunos dirigentes políticos reclamaran nuevas regulaciones y controles para los mercados financieros.

El ministro de Economía de Francia, Pierre Moscovici, lanzó una reforma del sector que apunta a separar a los bancos comerciales de las instituciones financieras y a limitar los salarios de los directivos.

Gabriel, del SPD, reclamó un tope de salario y de bonos y la responsabilidad personal de presidentes, directores generales y gerentes de bancos cuando las pérdidas sean causadas por transacciones especulativas de alto riesgo.

Medidas similares fueron propuestas por la Comisión Independiente para la Banca (ICB, por sus siglas en inglés), creada en el 2010 para reformar el sector y promover la competencia y la estabilidad financiera.

Pero las ideas no fueron del todo consideradas por el nuevo plan del gobierno para reestructurar el mercado financiero, anunciado a principios de este mes, que, de todas maneras, no se implementará hasta el 2019.

De hecho, la mayoría de las medidas discutidas en Alemania, Francia y Gran Bretaña están incluidas en el acuerdo de Basilea III, último pacto normativo internacional para reforzar y regular la estabilidad y solvencia del sector financiero.

La nueva normativa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, todavía en discusión, será aplicada paso a paso a partir del 2013 con vistas a su total implementación en el 2019.

Economistas independientes sostienen que la demora en fijar nuevos controles a un sector obviamente corrupto prueba la falta de voluntad política de los gobiernos de llegar a la raíz del problema.

Según el economista francés Paul Jorion, “tras cinco años de la peor crisis financiera de la historia, todos los intentos para regular los bancos y los fondos son letra muerta”.

En cambio, “la Unión Europea y los gobiernos siguen dejando a sus propios ciudadanos en la miseria total”. (Tomado de IPS)